

## La paz como bien superior

Se puede violar la Constitución si se trata de obtener el bien superior de la paz”, nos dicen muchos de los que siempre defendieron sus normas insustituibles y ahora tratan de legitimar las burdas modificaciones y derogaciones de la Carta, como si esta fuera el trapo de limpiar los errores de lo negociado.

Algunas reflexiones:

1. Ningún principio constitucional es categórico, ni *prima a priori* sobre los otros principios, pues, como dice Alexy, todos los principios constitucionales son de optimización, es decir, solo son exigibles si son jurídica y fácticamente posibles. Con la tesis violatoria, so pretexto de la paz como bien superior, habría sido necesario entregarle a Hitler toda Europa, para evitar la guerra, como de hecho sucedió al comienzo de la misma. Entregarle sin condiciones la paz al enemigo es incrementar la guerra, si este no es leal y respeta nuestras convicciones. ¡Hace mucha falta releer *La lucha por el Derecho*, de Ihering!

2. Para los amigos del proceso de paz a todo precio y riesgo, a condición de silenciar los fusiles de las Farc, se justifica todo tipo de matoneo contra el que opine que las cosas debieron hacerse mejor.

Como no hubo el consenso prometido, porque el acuerdo vigente era un proyecto del Gobierno con uno solo de los actores del conflicto, y apoyado en ausencia de la mayoría de la sociedad, hoy tenemos un país triste, agresivo, con miedo y con odios entre familiares y amigos de toda una vida. Los ataques verbales o armados de los dueños del proceso de paz, la beligerancia verbal de los políticos opositores y la criminal



JAVIER TAMAYO JARAMILLO

Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista  
tamajillo@hotmail.com,  
www.tamayoasociados.com

de grupos al margen de la ley borran, de lejos, el silencio de los 7.000 fusiles de las Farc. No hay violencia de las Farc, pero hay menos paz ahora que antes de pactar con ellos.

Y peor, sibilantemente, el Gobierno radicaliza la confrontación entre Santos y Uribe, como si no cupieran términos medios. Se ataca a los que piensan distinto, con la táctica antidemocrática de la confrontación amigo-enemigo, tan de los afectos de Karl Schmitt y de Gramsci.

3. A Carlos Bernal Pulido lo entrevistó el Presidente, para saber si podía contar con su apoyo en la Corte, en las decisiones sobre el *fast track*. Pero el profesor Bernal le quedó grande a la Corte, y al poder del Gobierno que todo lo succiona para su maltrecho acuerdo. Como el magistrado cumplió con su conciencia, ahora se le acusa de formalista, cristiano o uribista, como si eso *per se* fuera un estigma. ¿Será que el 24 % que apoya a Santos es ateo y es el faro de la nación justa? Yo, que conozco a Bernal y a su obra, y que no comparto muchas de sus ideas, me llené de tristeza por las

bajezas con las que ha sido atacado un hombre que, como debe ser, está en la Corte para defender la Constitución y no para convertirla en pedazos cueste lo que cueste. Pero, doctor Bernal, ¡cuidese!, que esos ataques son para ablandarlo y se vuelva políticamente correcto en las sentencias que vienen. Si deja de fallar de acuerdo con la Carta, poco me importa el contenido de sus fallos, el costo histórico para usted será impensable. Su imperativo categórico es ser coherente.

4. Y como si faltara, Santos mostró su soberbia y sus odios contra el exministro Pinzón, porque manifestó su desacuerdo con algunos aspectos del Acuerdo de Paz. Inexcusablemente, Santos afirmó, desolado por las palabras de su exfuncionario, que “...la lucha por el poder que es la política, infortunadamente, saca a relucir lo peor de la condición humana”. Señor Presidente: ¿Eso fue lo que usted sacó a relucir cuando después de hacer la apología de la guerra para llegar al poder, de inmediato, fue a caer en brazos de sus enemigos? ¿O usted y sus legionarios son los únicos políticos que sacan a relucir lo mejor de la condición humana?

Señores gobernantes y formadores de opinión sean prácticos: mientras sigan señalando a los que no están de acuerdo con el manejo de la paz, como “amigos de la guerra”, “cristianos” y “uribistas”, Uribe seguirá creciendo con mengua del 24 % que todavía pertenece al mundo de los “justos”. ¡Por su bien: no ataquen más!

Solo habrá paz, como un bien superior, cuando haya un consenso entre todos los colombianos y todos los violentos silencien sus armas. La falta de ese consenso es la causa de que aumenten el odio y la violencia espiritual entre los amigos y opositores del Gobierno. Cuando ese acuerdo sea tangible, se justifica modificar la Constitución, pero no lo harán los poderes, a su antojo. La modificará la sociedad que forme parte del consenso.

## De la calumnia y otras infamias: caso Uribe Vélez-Samper Ospina

Campo más exuberante, complejo y apasionante del Derecho Público. Sus debates llenan páginas y páginas de textos en torno a la carga de argumentación que debe dársele a cada una de las discusiones que se construyen alrededor de ellos.

Por eso, el evento surgido en Colombia a propósito de la expresión utilizada por el senador Álvaro Uribe contra el periodista satírico Daniel Samper Ospina, al acusarlo de “violador de niños”, pone en ascuas el ámbito democrático en el país, dejando en la palestra grandes interrogantes sobre la libertad de expresión y sus límites en el contexto jurídico nacional e internacional.

Ante esta expresión, Samper Ospina inició una acción penal contra Uribe Vélez por el delito de calumnia, al considerar que le estaba atribuyendo un delito cuya prueba no existe. El senador Uribe

respondió a través de su abogado que la expresión “violador de niños” se refiere a que Samper Pizano en una columna de prensa se burló de una menor de edad que no tiene relación familiar con él.

Ante esta situación, vale la pena hacer cinco reflexiones. La primera es que la



FRANCISCO BARBOSA

Ph.D. en Derecho Público  
Universidad de Nantes (Francia).  
Docente Universidad Externado,  
@frbarbosa74

libertad de expresión es una piedra angular de las sociedades democráticas. Esta libertad está contemplada en los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13), la Convención Europea de Derechos Humanos (art. 10) o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además de eso, la libertad de expresión es pieza esencial de nuestra arquitectura constitucional y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Debe recordarse que todos los desarrollos que sobre este derecho se han establecido hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad, invocado y elaborado por la Corte Constitucional cuya fuente normativa es el artículo 93 de la Constitución de 1991.

Un segundo aspecto es que la libertad de expresión tiene dos dimensiones. La primera, la libertad de expresar ideas, convicciones y creencias de cualquier tenor, y la segunda, la dimensión pasiva relativa a que los ciudadanos tienen derecho a recibir esas ideas. Es evidente que Daniel Samper Ospina como periodista de opinión y como escritor de sátira política le ha puesto el lente a la acción pública de Álvaro Uribe, criticándolo, mofándose de él y atacándolo como expresidente y senador. Estas críticas son propias de la libertad de expresión y respetan las dos dimensiones de esa libertad.

Un tercer asunto desarrollado por la jurisprudencia tiene que ver con que los hombres públicos, por su exposición, limitan su derecho a la intimidad, evento que difiere cuando se trata de personas que no gozan de esa condición.

Sobre estos temas, la jurisprudencia de los tribunales ha indicado, por ejemplo, que: “Los límites de la crítica admisible son más amplios frente a un hombre político, que frente a un particular: a diferencia del segundo, el primero se expone inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos por parte de los periodistas como del conjunto de ciudadanos; debe, por consecuencia, mostrar una amplia tolerancia”. (Corte Europea de Derechos Humanos, *Lindon, Otchakovsky, Laurens et July c. Francia*).

## La necesaria seguridad jurídica en la ejecución de obras públicas

Todos sabemos que los resultados de la economía del segundo semestre de este año dependerán en gran medida de que los proyectos de infraestructura retomen el ritmo, pero lamentablemente el panorama no luce despejado.

Los nubarrones en el horizonte se originan en lo que los abogados hemos llamado genéricamente “inseguridad jurídica”, designando con esta expresión una pluralidad de fenómenos que tienen como consecuencia la disminución del apetito inversionista, incluso de aquellos que tienen inclinación a la toma de riesgos.

Cuando día tras día se leen los titulares de prensa que dejan en evidencia situaciones adversas para los proyectos, nadie con sentido común se anima en ese entorno enrarecido a tomar decisiones de inversión.

Lo anterior es lamentable, pues el país ha hecho un esfuerzo destacable en los últimos años para dotarse de un marco normativo e institucional protector de las inversiones, tanto extranjeras como nacionales: desde acuerdos internacionales de inversión, hasta normas de última generación, para asegurar reglas de juego claras a los desarrolladores y los financiadores de los proyectos. La última de estas iniciativas es el ansiado acceso a la Ode, cuyo ingreso nos pondrá a la vanguardia de las mejores prácticas.

¿Qué es lo que ocurre entonces,



ADRIANA ZAPATA  
Doctora en Derecho

*“La situación actual, plagada de casos que evidencian lo contrario, hace que el Derecho se convierta en una variable que frena la marcha de la economía”.*

que, a pesar de tan ingentes esfuerzos, la obra pública no retoma el ritmo de los años anteriores? Ocurre que no basta con tener buenas normas; es necesario que ellas sean estables y uniformemente aplicadas, pues, de lo contrario, el Derecho pierde su característica más importante desde el punto de vista económico y social: la predictibilidad, es decir, la posibilidad de esperar la permanencia y de anticipar el alcance de las reglas de juego que dan marco a las decisiones de inversión. La situación actual, plagada de casos que evidencian lo contrario,

hace que el Derecho se convierta en una variable que frena la marcha de la economía.

En lo que se relaciona con la estabilidad de las normas, el caso más protuberante lo encontramos en las consabidas reformas tributarias. Sin el capital político para sacar adelante la muy recomendada reforma estructural, el Gobierno ha tenido que acudir a reformas parciales orientadas, sobre todo, a incrementar sus ingresos fiscales. Tantos cambios y tan continuos han hecho que en el aspecto tributario, nadie sepa a qué atenerse. Pero, bueno es decirlo, no es aquí donde se encuentran los elementos que más han afectado recientemente el ritmo inversionista. Veamos unos casos muy preocupantes.

El primer ejemplo lo aportan las consultas a comunidades en proyectos de infraestructura. Estas corresponden a un estándar internacional y son necesarias, pero deben ser correctamente aplicadas. Por supuesto que las comunidades tienen derecho a plantear compensaciones por los impactos de las obras en sus territorios, pero la compensación debe guardar relación con el efecto de los trabajos, no con las necesidades mínimas insatisfechas de estas poblaciones, las cuales siguen siendo responsabilidad del Estado. También resulta inconcebible que una vez hecha la consulta, se admita